

LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA, UN DEBATE INTERDISCIPLINARIO

*Werner Mackenbach y
Günther Maibold*

PLANTEAMIENTO DEL DEBATE

El subcontinente latinoamericano se considera un ámbito de violencia endémica; al menos ese es uno de los estereotipos favoritos de la parte europea (ver Rinke). La imagen que se tiene de los países al sur del Río Grande está determinada por golpes de Estado, guerrillas, terror paraestatal y la mafia de las drogas. El enorme tributo de sangre que actualmente se paga por la “guerra de las drogas” en México y por los persistentes conflictos con la guerrilla en Colombia, ha impedido en parte dirigir la mirada hacia Centroamérica (en especial, El Salvador, Guatemala y Honduras), donde existe un “centro blando” de Estados directamente afectados por la economía de las drogas, que difícilmente es capaz de oponer resistencia al avance del crimen organizado. Con un índice de 33 homicidios por cada 100,000 habitantes, la región se encuentra en un nivel de la criminalidad tres veces más alto que el promedio latinoamericano, en tanto El Salvador, con 65 muertos por cada 100,000 habitantes, ocupa el primer lugar en América Latina (PNUD 68). Sin embargo, son las persistentes estructuras de violencia y espacios donde prevalece la violencia (ver

Krennerich), las que dominan la situación en el continente y se manifiestan de muy diversa forma: la violencia política de “arriba” o de “abajo”, la violencia social difusa o una violencia ya “cotidiana” que se prolonga hacia las relaciones familiares, caseras e íntimas (ver Tobler) pueden encontrarse a la par o sucederse una a otra. A pesar de que estas expresiones de violencia siguen patrones coyunturales y dramaturgias variables, tienen como raíz común la debilidad crónica del Estado, que le impide establecer un monopolio del poder, aunado a cierta inestabilidad política, que vincula la propensión de emplear la violencia con un grado muy intenso de la misma.

Sin embargo, no en todos lados hay violencia y guerra, son los grados de agresión los que distinguen la convivencia en el continente. La creciente difusión y privatización de la violencia que parte de los rebeldes, del crimen organizado o cotidiano, pone de relieve un fenómeno que describe una parte central del proceso de transformación de la violencia. El monopolio estatal del poder –en la medida en que éste exista en ciertos países– es de nuevo retado y de diferente manera por el crimen organizado; las condiciones de la población son cada vez más precarias a consecuencia de la violencia social difusa que abarca cada vez más ámbitos de la vida; las amenazas que parten del crimen cotidiano fortifican las experiencias negativas de aquellas sociedades que, por haber vivido en carne propia una guerra civil, sienten mucho miedo (ver Koonings y Kruijt). Hay estudios sobre espacios públicos y percepciones de violencia que prueban que la sensación de miedo es una construcción social difícilmente comprobable por medio de datos empíricos (ver Huhn; Peetz). Sigue vigente la valoración perceptiva

de sociedades de alta incidencia de criminalidad, aunque los actores de la violencia, las formas de agresión y sus secuelas en la sociedad se hayan modificado sustancialmente frente a las décadas de los años setenta y ochenta, caracterizadas por la guerrilla y violencia de cuño político (ver Fischer y Krennerich). Hoy día parece que el desafío elemental no radica en la violencia estatal o contraestatal, sino en aquella violencia no estatal que compensa, complementa, socava o ignora al Estado (ver Krennerich; Zinecker, “Gewalt”).

Las (re)presentaciones simbólicas, así como también las definiciones, interpretaciones y clasificaciones discursivas y estéticas alrededor de las que se ha soltado una verdadera lucha por la soberanía interpretativa en el ámbito de la violencia, el crimen y la (in)seguridad, juegan un papel central en relación con la percepción social de la violencia. Parecen existir estrechas vinculaciones de influencia, penetración y reforzamiento recíproco entre la escenificación medial/estética de la violencia, la actuación del Estado y la percepción social. Las formas por medio de las que una sociedad percibe la violencia y reacciona ante ella, dependen en alto grado de los procesos (discursivos) por medio de los que “se tratan” la definición y el significado de la violencia (ver Huhn, Oettler y Peetz). Es el campo literario en el más amplio de sus sentidos (que abarca desde el periodismo hasta la cultura popular y de masas, sin excluir las “bellas letras”), en el que con más énfasis se tratan las relaciones de la violencia.

Si en las ciencias sociales se ha contemplado la violencia en sus diversas dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales como un elemento constitutivo de la historia latinoamericana, en los estudios culturales

y la ciencia e historia de la literatura se ha hablado de una continuidad en las manifestaciones estéticas de la violencia y se han identificado diferentes fases en la historia de la cultura y de la literatura latinoamericanas, en las que se puede hablar de una predominancia de la violencia como manifestación estética. Tradicionalmente se leían las presentaciones y representaciones literarias de la violencia en la América Latina del siglo XX, en especial desde la “novela de la violencia” colombiana de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, bajo el rubro de la denuncia de la violencia política y una escritura comprometida tanto en lo social como en lo político. La representación estética de la violencia jugó un papel muy importante en la literatura (narrativa): ya sea denunciando las represiones de los dominadores en contra de la población o legitimando la contra-violencia de los levantamientos de aquellos pueblos que trataban de luchar por su liberación.

A partir de las postrimerías de los años noventa se realiza aquí un cambio de paradigmas. Las literaturas (narrativas) en América Latina se convierten en un medio, en el que se trata estéticamente la violencia en sus más diversas dimensiones. Las (re)presentaciones literarias de la violencia ya no se limitan a la denuncia, sino que se nutren, aunque su tema “principal” ya no sea la violencia, de las diferentes relaciones de violencia, que caracterizan las sociedades latinoamericanas: la violencia estructural, con fundamentos históricos, que le subyacen desde el acto de dominación y subyugación de la conquista; las secuelas de la violencia política y militar directa que emanan de los conflictos armados entre los setenta y los noventa y la violencia “indirecta” en las relaciones económicas, domésticas, familiares, etc. Muchos de estos textos narrativos

privilegian sobre todo aquella perspectiva que se ocupa de las secuelas que dejan estas relaciones de violencia en el individuo y sus relaciones personales e indagan las (im)posibilidades de la convivencia con y bajo la violencia. Procesan los múltiples procesos de transformación que han marcado a las sociedades latinoamericanas tanto en los espacios públicos como en los privados, sin dejar de lado los más íntimos y secretos. Logran además horadar la lógica de la separación entre lo “público” y lo “privado” (ver Mackenbach, “Zwischen”; Mackenbach y Ortiz Wallner).

Partiendo de estas premisas, se realizó los días 11 y 12 de marzo de 2010 en la Universidad Potsdam/RFA una conferencia internacional que se dedicó a debatir los siguientes interrogantes:

- 1) ¿De qué manera repercute la transformación de la violencia en las sociedades y literaturas latinoamericanas, teniendo en mente la transición de la violencia política a una violencia social difusa?
- 2) ¿Son fundamentalmente diferentes los procesamientos estéticos y políticos de la *violencia criminal* de los de la *violencia política* que le antecede? ¿De qué forma ha contribuido a ello una composición distinta de los actores de la violencia?

DEGENERACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Para México, Centroamérica y Colombia, esto es, para aquellos países que se colocaron en el centro del debate durante el congreso, con toda razón se puede sostener la tesis de una degeneración de la violencia política aunada a las tendencias de una despolitización de la

misma. Se basa en un esquema de categorías, que se extiende desde la autonomización de la violencia, pasando por su privatización hasta su comercialización (ver Waldmann, "Gesellschaften"). Sin embargo, este modelo categórico del proceso progresivo de la transformación de la violencia de "grievance" a "greed" (ver Collier) no es lineal e ineludible, ya que también pueden descubrirse experiencias de una re-politización de la violencia (Daase 263).

A primera vista parece que en América Latina predomina una tendencia hacia la despolitización de la violencia si se toma en consideración, por ejemplo, la metamorfosis de ex grupos guerrilleros; sin embargo, también se han desarrollado patrones de actividades que viven de la simbiosis de diversas expresiones de la violencia. Todavía son países como El Salvador y Guatemala, junto con Colombia, los que muestran tener el índice más alto de homicidios en América Latina, porque de hecho en estos países muere más gente por actos de violencia que durante la guerra civil. Aquí ya no se trata de una violencia de raíz política, sino de una violencia criminal que se ha cotidianizado (ver Waldmann, "Veralltäglichung"). Se puede poner en tela de juicio, si este cambio de las expresiones de violencia es ya una descripción suficiente para explicar este desarrollo. Sin embargo, tiene su razón de ser por la autonomización de una violencia hasta ese momento encuadrada en el ámbito militar; las acciones y la criminalidad violenta por lo tanto se comprenden con frecuencia como un continuo (ver Bertelsmann-Stiftung). Así, en cuanto a la región centroamericana, se defiende la opinión de que la violencia de la guerra civil se transformó sin más en criminalidad violenta (Debiel 49). Es precisamente

en México, con su tradición de violencia anclada en la cultura política (ver Knight), y en Centroamérica, con sus múltiples experiencias de levantamientos violentos, donde, con la aparición de las bandas juveniles (maras), se ha dado una nueva forma de criminalidad que se vincula estrechamente con preguntas de la identidad y con una criminalidad de supervivencia y de cotidianidad.

Las reacciones estatales a este fenómeno, que en una primera ola formulan sobre todo una política de la “mano dura” por medio de una represión masiva, dan un ejemplo de las formas que puede tomar una re-politización de la violencia. En especial, el caso de Centroamérica pone de relieve que después de los tratados de paz no se logró la consolidación de las funciones del Estado y la consecuente desprivatización de la violencia y por eso se instalara –tal y como sucediera en Colombia– una mayor difusión de las relaciones de violencia. Las dificultades con la integración de excombatientes, refugiados y desplazados a la sociedad rebasaban en mucho las capacidades de estos pequeños estados e incluso resultaron ser insuficientes las contribuciones externas para el desarrollo (ver Kurtenbach, “Konfliktsystem”).

A ello se aúna la tesis de que bajo el signo de la globalización se instalan procesos de difusión de la violencia, que han revelado que el control de una “globalización de sombra” como tarea de la política resultan ser desafíos que rebasan el marco nacional (ver Kurtenbach y Lock). Por eso, la lucha del gobierno mexicano contra los cárteles en el propio país, pese a todas las diferencias con respecto al caso colombiano (ver Felbab-Brown), con los fenómenos de los secuestros, asesinatos y robos a mano armada,

representan tal amenaza a la seguridad, que el Estado mexicano ha recurrido al ejército y, dejando de lado las reservas tradicionales, ha estado dispuesto a permitir una cooperación con Estados Unidos en el marco del Plan Mérida. La creciente presión ejercida sobre los cárteles y las capturas de importantes actores no sólo han tenido como consecuencia el aumento de la violencia entre los cárteles por la supremacía en sus esferas de dominio, sino también han desembocado en un desplazamiento de sus actividades hacia el sur, hacia el “centro blando de Centroamérica”, donde los pequeños estados de la región casi no se pueden defender ante el socavamiento por la economía de las drogas (ver Maihold y Brombacher).

En Colombia ha habido una mejora de la situación de seguridad con la “política de la seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe y ha sido posible reducir la capacidad de acción de las guerrillas del FARC y ELN (ver Maihold), sin embargo, no se ha logrado una pacificación de los conflictos en la sociedad a pesar de una desmovilización de los paramilitares organizados en la AUC. Las nuevas “bandas emergentes” (ver International Crisis Group) ponen de relieve, que en este país no sólo se ha realizado una transformación de la forma de la violencia política hacia la criminalidad por la vinculación de los actores de la violencia con el comercio de las drogas, sino que también se están reorganizando las fuerzas paramilitares en una nueva criminalidad de bandas, después de haber sido formalmente desmovilizados.